



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y se crea el fondo documental de requisitorias, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la introducción de tres modificaciones en el Real Decreto 95/2009: así, en primer lugar, se suprime el requisito de la notificación al imputado para la incorporación de las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencias no firme al Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes; en segundo término se prevé la creación, dependiendo del citado Registro Central del Fondo Documental de requisitorias, al que se refiere la nueva disposición adicional cuarta del Real Decreto 95/2009, introducida por el apartado tres del artículo único del Proyecto. Finalmente, se modifica el artículo 17.5 del Real Decreto para prever la recogida de antecedentes del Registro Central del Estado del que sea nacional el solicitante ciudadano de otro Estado Miembro de la Unión Europea, para su inclusión en el certificado que deba facilitarse al mismo.

En relación con la existencia y contenido del Registro Central de Medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, debe recordarse lo señalado por esta Agencia en el informe de 23 de octubre de 2008, emitido en relación con el entonces Proyecto de Real Decreto de creación del sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia, en que se señalaba lo siguiente:

*“(...) debe hacerse especial referencia a la creación del Registro Central de Medidas cautelares, no prevista expresamente en una norma con rango de Ley, a fin de delimitar si el tratamiento de los datos que implica su existencia puede considerarse igualmente amparado por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999.*

*Tal y como recuerda la Exposición de Motivos del Proyecto, la existencia de este Registro encuentra su justificación en el necesario conocimiento por los órganos jurisdiccionales de la existencia de otras causas pendientes, requisitorias o medidas cautelares impuestas al acusado o procesado, a fin de lograr una aplicación adecuada de las normas penales y procesales, tanto en relación con la puesta en libertad o*



*adopción de la medida de prisión provisional en fase de instrucción como para la determinación de la pena en fase de enjuiciamiento.*

*Así, en lo referente a la prisión provisional, dispone el apartado a) del artículo 503.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que*

*1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurren los siguientes requisitos:*

*3º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:*

*a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.*

*Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta Ley.*

*Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado.”*

*Asimismo, el artículo 66.1.6º del Código Penal establece, para la determinación de la pena a imponer que “cuando no concurren atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”.*

*Además, será posible la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, según el párrafo segundo del artículo 80.1 del propio Código, en atención “a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste”.*

*Por último, según el artículo 81 del Código Penal, serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:*



*“1ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código.*

*2ª Que la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.*

*3ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas.”*

*Lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 ha de complementarse con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento de desarrollo de la misma, en cuya virtud “será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando (...) lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concorra uno de los supuestos siguientes:*

*- El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.*

*- El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.”*

*Pues bien, aún cuando no existe una norma con rango de Ley que prevé expresamente la existencia de Registro de Medidas Cautelares, su contenido resulta necesario para que por los órganos jurisdiccionales del orden penal pueda darse pleno cumplimiento a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal que acaban de ser reproducidas, dado que dichos órganos deberán conocer las circunstancias personales del acusado, imputado o reo y, en particular la existencia de causas penales o requisitorias dirigidas contra los mismos, para lo cual resulta necesario el establecimiento de un fichero en que se hagan constar estas circunstancias y que pueda ser objeto de consulta por aquéllos.*



*Por tanto, cabe considerar que, aún cuando sería aconsejable que existiese una norma con rango de Ley que previese expresamente su existencia, en términos similares a los que se prevé para los restantes registros integrantes del sistema, el tratamiento de datos derivado de la creación del Registro de Medidas cautelares se encontraría habilitado por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con las normas penales y procesales que acaban de reproducirse.”*

El Proyecto ahora sometido a informe se limita a reemplazar la exigencia de la notificación al imputado de las resoluciones inscribibles por la mera adopción de las mismas, indicándose que tal medida es adoptada, “incluso cuando no se trate de procedimientos de violencia domestica o de género (...) en aras a salvaguardar la protección de la víctima y el conocimiento de la adopción de las medidas para su protección por parte de los que tienen encomendada su tutela”.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la finalidad que justifica la legitimación para la creación de este Registro Central, a la que se hizo referencia en el informe de 23 de octubre de 2008 anteriormente reproducido, debiendo considerarse que el hecho derivado de la inscripción de las resoluciones judiciales con carácter previo a su notificación al imputado resulta coherente con la citada finalidad, en los términos descritos en la Exposición de Motivos del proyecto sometido a informe que acaban de reproducirse, por lo que cabe considerar que esta modificación resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

En cuanto a la creación del Fondo Documental de Requisitorias, el Proyecto se refiere al artículo 516 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que dispone que “En la resolución por la que se acuerde buscar por requisitorias, el Juez designará los particulares de la causa que fueren precisos para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado una vez sea habido. Testimoniados la resolución judicial y los particulares por el Secretario judicial, se remitirán al Juzgado de Guardia o se incluirán en el sistema informático que al efecto exista, donde quedarán registrados”.

Ciertamente el texto reproducido no impone la creación de un sistema informático para estos supuestos, por cuanto se contempla la inclusión de la requisitoria en el mismo como alternativa en caso de que el mismo fuera creado. Sin embargo, cabe considerar que la interpretación del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en los términos que se derivan del artículo 10.2 a) de su Reglamento de desarrollo permitiría entender que la creación del Fondo al que se hace referencia se encuentra amparada en la previsión contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remitiéndose el apartado 2 de la disposición final cuarta del Real Decreto 95/2009 de forma expresa al citado artículo 516 en cuanto a la delimitación del contenido del Registro.



Por otra parte, para valorar la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 debe atenderse especialmente a los principios de finalidad y conservación de los datos, establecidos en los apartados 2 y 5 del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, quedando el primero de los mismos delimitado por la limitación de los accesos al Fondo establecida por el apartado 4 de la disposición, que establece que “La documentación asociada a cada requisitoria estará disponible para los órganos judiciales, única y exclusivamente, a los efectos de los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho acceso se llevará a cabo por el personal de la oficina judicial autorizado por el Secretario Judicial”.

Al propio tiempo, el apartado 5 establece que “Los documentos asociados a cada requisitoria quedarán automáticamente eliminados cuando se produzca la cancelación de la requisitoria”, limitando así la constancia del dato en el Fondo a la propia vigencia de la requisitoria, por lo que se garantiza que los datos no se conservarán por más tiempo del necesario para el cumplimiento de la finalidad que justifica su tratamiento, conforme exige el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999.

Por todo ello, la creación del Fondo Documental de Requisitorias resulta conforme, en los términos establecidos en el apartado tres del artículo único del Proyecto a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999.

Por último, el apartado dos del artículo único introduce un nuevo párrafo segundo en el artículo 17.5 del proyecto, disponiendo que “Cuando se trate de ciudadanos de la UE con nacionalidad distinta a la española el Registro Central de Penados solicitará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona que realiza la petición la información correspondiente a dicha persona que constara en su registro para poder incluirla en el certificado que se le facilite”.

Tal y como indica la Exposición de motivos, la reforma citada trae causa de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, que prevé que desde la fecha establecida en su artículo 11.7; esto es transcurridos tres años desde la aprobación de los modelos normalizados a los que la misma se refiere en su Anexo, “siempre que una persona solicite a la autoridad central de un Estado miembro que no sea el Estado miembro de su nacionalidad información sobre sus antecedentes penales, la autoridad central del Estado miembro en que se presente la solicitud presentará una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes a la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad, para poder incluir dicha información y datos conexos en el extracto que se facilitará a la persona de que se trate”.



De este modo, solicitado el acceso por el interesado al Registro, éste podrá conocer no sólo los datos que obre en el mismo, sino también los contenidos en aquél del que es nacional, facilitándosele así un mayor conocimiento del estado de sus antecedentes, lo que puede igualmente considerarse conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Por todo lo antedicho procede informar favorablemente el Proyecto sometido al parecer de esta Agencia.